

I.C.A. de Valparaíso

Valparaíso, diecisiete de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, se interpone recurso de amparo en favor de **Alexis Giovanni Barrios Aedo, RUT 17.568.097-7**, en contra de la **resolución dictada el 9 de julio del año en curso**, por los magistrados del **Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar**, don Fernán Rioseco Pinochet y don Claudio Correa Zacarías, quienes, por mayoría, decretaron la prisión preventiva del amparado, de forma ilegal y arbitraria, lo que se traduce en una vulneración ilegal a su libertad personal.

En cuanto a los hechos, explica que el ocho de julio de dos mil veintidós, el amparado fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Quilpué, por el delito de homicidio simple, dictándose a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva.

Añade que esta decisión fue revisada el tres de abril del año dos mil veintitrés, manteniéndose por el mismo Tribunal, no obstante lo cual, la defensa dedujo apelación en contra de dicha decisión, revocándose la prisión preventiva del amparado por esta Ilustrísima Corte, en fallo ROL 751-2023, sustituyéndose por las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional.

Indica que, posteriormente, en causa RIT 540-2023 seguida ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, el pasado nueve de julio se dictó veredicto condenatorio en contra del recurrente por el delito de homicidio simple.

Explica que, una vez comunicado el veredicto, tanto el Ministerio Público como la parte querellante, solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva del condenado don Alexis Giovanni Barrios Aedo, por la prognosis de la posible pena, el riesgo de fuga, y además por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.

El tribunal, por mayoría accede a la solicitud y decreta la prisión preventiva, señalando que *“efectivamente han variado las circunstancias tenidas a la vista al momento de que cesó la prisión preventiva, el 6 de abril de 2023, es decir, hace más de un año atrás. El fundamento de esta modificación reside en que estamos ya en un estadio procesal y un estándar de convicción muy superior al que exige el artículo 140 del Código Procesal Penal en la etapa de investigación ante un juez de garantía, porque ya hay un veredicto, una decisión de condena que el legislador entiende que ha sido suficiente para derribar, al menos hasta que la sentencia quede firme, por lo menos en esta sede, la presunción de inocencia que ampara al acusado. Por lo tanto, el acusado en este momento ha sido condenado, no es que se presuma su participación o existan indicios de un delito. Por lo tanto, la variación de circunstancias es evidente y en perjuicio del acusado. Y en cuanto a la necesidad de cautela, estima el tribunal compartiendo los*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YRFMXXSZRV

criterios que han señalado los acusadores en esta audiencia, estamos hablando de un delito de homicidio simple donde objetivamente la pena, sin perjuicio de lo que se diga en el fallo, empieza en 10 años y un día, es decir, una pena que por su propia naturaleza es extremadamente grave, y así lo ha establecido el legislador que obliga a estos jueces a considerar la gravedad de la pena asignada por la ley, como asimismo las circunstancias y forma de comisión del delito en términos de extensión del mal causado, como también señalaron los acusadores en su oportunidad. Además, que se trata de una víctima mujer y el ordenamiento jurídico impone a estos jueces y al tribunal un deber especial respecto de este tipo de víctimas; es claro que la legislación va orientada a ese sentido. Y adicionalmente a todo lo expuesto, que ya es suficiente para concluir que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, a juicio de la mayoría del tribunal existe un evidente peligro de fuga porque la pena que se imponga, cualquiera que sea, incluso en el mejor escenario que ha planteado la defensa que sería un art. 11 N° 9 muy calificado, es una pena efectiva; por lo tanto hay un incentivo muy poderoso para sustraerse de los actos del procedimiento. Y que el imputado se haya presentado a la audiencia de juicio oral no cambia nada en concepto de la mayoría del tribunal, porque es su deber, no es una gracia que se haya presentado”.

Hace presente que la decisión se acordó con el voto en contra de la magistrado Sra. Poblete, quien haciendo suyos los argumentos de la defensa, estimó que atendido el estado procesal de la causa, y existiendo recursos pendientes que aún pueden ejercerse, y que el imputado se ha presentado voluntariamente a las audiencias de juicio oral, pudiendo eludir la acción de la justicia, y que la caución económica propuesta por la defensora junto con las cautelares que también propuso, serían suficientes para garantizar los fines del procedimiento.

Argumenta que la resolución recurrida infringe el derecho a la libertad personal y seguridad individual del amparado, por cuanto no cumple con los requisitos de los artículos 36, 122 y 143 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 144 de dicho cuerpo legal, toda vez que carece de una real fundamentación, sin indicar con claridad cuáles son los nuevos antecedentes que conllevan a modificar la necesidad de cautela, y así variar las medidas cautelares de firma y arraigo nacional a la de prisión preventiva.

Apunta a que no han variado las circunstancias porque se haya comunicado el veredicto condenatorio, pues antes de este, el acusado arriesgaba la misma pena, la víctima también era idéntica, y aún más, previo a la comunicación del veredicto, el amparado arriesgaba igualmente pena efectiva, y sin perjuicio de ello, se presentó voluntariamente a todas las audiencias del juicio.

Advierte que la decisión del Tribunal de Juicio Oral se funda únicamente en la presunción de que todo encartado que arriesga pena



efectiva necesariamente se va a fugar, sin que exista antecedente alguno que demuestre un comportamiento refractario del imputado hacia los actos del proceso.

Explica que el imperativo del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal rige para toda resolución judicial, incluso aquella que resuelve una petición de este tipo de medidas; apuntando que el artículo 122 del mismo código consagra como principio general de toda medida cautelar que estas *“serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada”*, y por su parte el artículo 143 siguiente ordena que *“el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una resolución fundada, en la cual expresará claramente los antecedentes calificados que justificaren la decisión”*, concluyendo de este modo que todas estas normas refuerzan el estándar de fundamentación requerida a propósito de la medida cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico, más allá del básico del artículo 36 citado.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso y se deje sin efecto la resolución recurrida, ordenando la inmediata libertad del amparado, manteniendo las cautelares ya decretadas anteriormente, es decir, arraigo nacional y firma quincenal.

A folio 4, **evacúan informes los Sres. Jueces Fernán Rioseco Pinochet, Claudio Correa Zacarías y Viviana Poblete Vera, jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.**

Manifiestan que los días 4, 5, 8 y 9 de julio de 2024, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral, en la que, habiendo deliberado, después de clausurado el debate de rigor, el Tribunal decidió de forma unánime condenar al acusado como autor de homicidio simple.

Añaden que en dicha oportunidad y una vez pronunciado el veredicto condenatorio, finalizada la audiencia de determinación de pena, el fiscal y querellante solicitaron se le imponga al acusado la medida cautelar de prisión preventiva, oponiéndose la defensa.

El Tribunal arribó a la decisión, por mayoría, de acceder a la petición del Ministerio Público y de la querellante, considerando que efectivamente han variado las circunstancias tenidas a la vista al momento en que cesó la prisión preventiva el 6 de abril de 2023, es decir, más de un año atrás. Aclaran que el fundamento de esta modificación reside en que estamos ya en un estadio procesal y un estándar de convicción muy superior al que exige el artículo 140 del Código Procesal Penal, porque ya hay un veredicto, una decisión de condena que el legislador entiende que ha sido suficiente para derribar, al menos hasta que la sentencia quede firme, por lo menos en esta sede, la presunción de inocencia que ampara al acusado. Por lo tanto, el acusado en este momento ha sido condenado, no es que se presuma su participación o existan indicios de un delito. Por lo tanto, la variación de circunstancias es evidente y en perjuicio del acusado. Asimismo, advierte en cuanto a la necesidad de cautela, que



objetivamente la pena del delito de homicidio simple comienza en 10 años y un día, es decir, una pena que por su propia naturaleza es extremadamente grave, lo que obliga a considerarlo así a los jueces informantes.

Apunta el informe que se trata de una víctima mujer, y el ordenamiento jurídico impone un deber especial respecto de este tipo de víctimas, y que la legislación claramente va orientada en ese sentido.

Adiciona que, además de lo anterior, que ya es suficiente para concluir que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, a juicio de la mayoría del tribunal existe un evidente peligro de fuga, porque la pena que se le imponga, cualquiera que sea incluso en el mejor escenario, es una pena efectiva, por lo tanto, hay un incentivo muy poderoso para sustraerse de los actos del procedimiento, y que el imputado se haya presentado a la audiencia de juicio oral no cambia nada, porque es su deber hacerlo y no una gracia.

Finalmente, señalan que la decisión adoptada por el Tribunal respecto de la medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra del imputado, se basó en lo dispuesto en los artículos 140 y 144 inciso final del Código Procesal Penal, fundándose en la variación de antecedentes que se tuvieron en vista al momento de resolver, y que, frente a esta resolución objeto del presente amparo, la defensa no ha deducido recurso de apelación hasta la fecha.

A folio 6, se ordenó traer los **autos en relación**.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción de amparo garantiza a toda persona que ilegalmente sufra cualquier privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual, la posibilidad de recurrir ante la respectiva magistratura, para que dicte en tal caso las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Segundo: Que, lo solicitado mediante esta acción es que se deje sin efecto la medida de prisión preventiva decretada respecto del amparado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, luego de la dictación del veredicto condenatorio en su contra y previa solicitud del Ministerio Público y la parte querellante.

Tercero: Que, el acto impugnado, dictado en audiencia de fecha nueve de julio del presente año, dispuso la prisión preventiva del actor por estimar que han variado considerablemente los antecedentes que se tuvieron a la vista para decretar las medidas cautelares menos gravosa que pesaban sobre aquel, teniendo en consideración especialmente el veredicto condenatorio en su contra y estimando que la libertad del amparado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes y lo señalado en el considerando anterior, se desprende que la resolución recurrida no es ilegal, que fue dictada por tribunal competente, dentro de la esfera de



sus atribuciones y previo debate de los intervinientes en audiencia, basados esencialmente en la condena dictada en ese mismo acto en contra del amparado por el delito de homicidio simple, circunstancia que en forma evidente demuestra un cambio en las condiciones que afectan al recurrente, por lo que el recurso de amparo será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, **se rechaza** la acción constitucional de amparo interpuesta a favor de **Alexis Giovanni Barrios Aedo**, en contra del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.

Acordado con el voto en contra de la Ministra (S) Marisol González Vera, quien estuvo por acoger el recurso de amparo interpuesto y decretar la libertad del amparado, teniendo presente para ello que la resolución impugnada a través de este arbitrio carece de fundamentación real y deriva en solo aparente, toda vez que a contrario de lo sostenido en la misma, en esta etapa procesal el principio de inocencia que favorece al acusado aún aparece incólume, ya que ni siquiera se ha redactado la sentencia del grado y la posible pena a imponer en este caso por sí sola no puede sostener un posible peligro de fuga, ya que jamás una medida cautelar puede transformarse en el cumplimiento anticipado de una futura pena y asimismo, aparece que el amparado jamás ha tratado de eludir la acción de la justicia y, en ese entendido, la privación de libertad del amparado se torna ilegal, toda vez que ha existido una manifiesta afectación de su libertad personal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

NºAmparo-1519-2024.

En Valparaíso, diecisiete de julio de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YRFMXXSZRV



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YRFMXXSZRV

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Jaime Patricio Alejandro Arancibia P., Vicente Jesus Hormazabal A. y Ministra Suplente Mirtza Marisol González V. Valparaiso, diecisiete de julio de dos mil veinticuatro.

En Valparaiso, a diecisiete de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YRFMXXSZRV